

LA NUEVA COYUNTURA REGIONAL.
DEBATES URGENTES



**GUATEMALA: LOS DESAFÍOS
EN TIEMPOS DE
FUNDAMENTALISMOS
RELIGIOSOS Y POLÍTICOS**

**ANA SILVIA
MONZÓN**

Veintitrés años después de la firma de los Acuerdos de Paz, la sociedad guatemalteca se encuentra polarizada, con un Estado débil e incapaz de resolver los problemas estructurales de la pobreza y la exclusión. Se suma ahora una coyuntura de transición ante la toma de posesión de un nuevo gobierno en el mes de enero del 2020.

Si bien los Acuerdos de Paz abrieron la oportunidad de avances hacia un cambio institucional y político en un país donde el Estado no ha cumplido con garantizar los derechos básicos de la mayoría de la población, esta posibilidad se agotó pronto por el peso de la corrupción, del inveterado autoritarismo y de los intereses económicos, no sólo nacionales sino internacionales. Asimismo, el sistema de partidos políticos es obsoleto, cooptado por el financiamiento de dudosa procedencia y en crisis de legitimidad y representatividad (CICIG, 2015).

Cabe destacar también el papel del ejército, que, si bien en el período inmediato a la firma de los Acuerdos de Paz estuvo de bajo perfil, vuelve a ser visible en el ámbito público, sobre todo en los últimos seis años, a partir del gobierno del ex general Otto Pérez Molina (2012-2015). La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-CICIG, reveló en el 2015, la sinergia entre el ejército y las autoridades estatales al más alto nivel, con las élites económico-políticas, y su papel en el entramado que ha cooptado al Estado para fines particulares. Los acontecimientos que han marcado el accionar del actual gobierno, y que dieron como resultado el fin del mandato de esta Comisión, inédita en el mundo, dan cuenta de la influencia de la institución armada: pasó de tutelar la democracia en los años noventa, a jugar un papel clave en la reconfiguración autoritaria del país.

A estas reflexiones, cabe sumar, por ejemplo, el riesgo que implica el cierre de espacios y la imposición de censuras, abiertas o veladas, en la expresión, movilización y organización ciudadana que, en el 2015 colocó a miles de ciudadanas y ciudadanos en las calles, quienes ante la evidencia de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la CICIG, tomaron conciencia de los niveles de corrupción y de su impacto negativo para la transformación de la sociedad guatemalteca.

La indignación ante la exposición pública de un añejo esquema de privilegios llevó incluso al planteamiento de un cambio constitucional que permitiera establecer un nuevo pacto social y político, realmente democrático. Pronto, esas voces fueron acalladas y se restableció el denominado pacto de corrupción cuyas expresiones más retrógradas no han dudado en aliarse y, a través de mecanismos como la cooptación de instituciones clave y la reinstalación de prácticas de corrupción que permean la dinámica política, están vulnerando y marcando una regresión en el proceso ya avanzado de denuncia y desmantelamiento de estructuras paralelas de poder.

El papel del Ministerio Público, de la CICIG, de la Corte de Constitucionalidad, de la figura del Procurador de Derechos Humanos, y de los organismos judicial y legislativo es clave, y son actualmente los escenarios que están en disputa. De ahí las acciones políticas e institucionales, así como el discurso marcadamente nacionalista, del actual gobierno contra la CICIG, también las iniciativas de leyes abiertamente regresivas en términos de derechos humanos, que impulsan los diputados especialmente quienes están vinculados al partido que llevó al actual presidente al poder.

En ese sentido, un desafío que tiene implicaciones graves para la garantía de los derechos de la ciudadanía, como se está observando en los países del Sur, es el avance de una ideología conservadora y fundamentalista, en términos religiosos y políticos que, en sintonía con tendencias mundiales y regionales, favorecen el ascenso público de personajes abiertamente elitistas, racistas, machistas y homófobos, contrarios a los principios de la democracia, pero que aprovechan los mecanismos formales de este sistema para tener acceso al poder político con fines espurios.

Con habilidad y recursos, quienes ejercen el poder político, económico, mediático y discursivo han capitalizado la subjetividad religiosa, conservadora y escasamente crítica que prevalece en la sociedad. Se han concentrado en el ataque a los avances de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, generando discursos de odio que, en realidad, funcionan como cortinas de humo que les permitan ir desmantelando lo construido en los últimos veinte años, en términos de institucionalidad y marcos normativos y políticos progresistas, consolidando a la vez sus esquemas de poder basados en un pensamiento autoritario, elitista y violento.

Ese posicionamiento encuentra eco en una sociedad donde la percepción ciudadana respecto a si la democracia es el mejor sistema de gobierno, ha venido en descenso continuo desde el 2013. En efecto, la satisfacción con la democracia se ha mantenido en nivel bajos, incluso por detrás del promedio Latinoamericano, que en 2017 fue del 30% (NDI, 2016).

La sociedad está en una encrucijada, entre las expectativas de transformaciones profundas, siempre en el marco del sistema de democracia representativa, pero con instituciones que realmente funcionen y estén libres de corrupción; y la pretensión de mantener el poder, por parte de quienes han sido señalados de diversos delitos, incluidos funcionarios de alto nivel, empresarios y militares.

En los últimos cuatro años se vienen remarcando las líneas divisorias existentes en la sociedad, entre posturas progresistas, incluso radicales, y las fuerzas conservadoras que, como mecanismo de sobrevivencia, han cerrado filas y han optado por posturas recalcitrantes y fundamentalistas.

Los cambios que se avizoraban con el ascenso de los movimientos sociales en los años noventa y primera década del siglo veintiuno, no han sido sostenibles. En el caso de los pueblos indígenas, es nuevamente la criminalización y la represión directa, el mecanismo con el que pretenden doblegarlos. Se recurre a los discursos racistas y a los prejuicios coloniales para justificar tales acciones. En el caso de las mujeres organizadas, y de la comunidad de la diversidad sexual se recurre al discurso religioso y abiertamente misógino. Y a las voces críticas en los medios, se les relega y censura.

En este panorama adverso hay resistencia, las organizaciones sociales persisten en sus demandas, pero la respuesta ha sido el cierre de espacios para la interlocución con el Estado, y más represión: asesinatos y encarcelamiento de líderes, y en los últimos meses, la imposición de Estados de Sitio con fines poco claros en territorios donde están asentadas mineras, empresas de monocultivos, y donde hay trasiego de drogas.

En el 2019 se realizaron elecciones que dieron como ganador a un personaje que, según las más recientes informaciones, continuará con la restauración autoritaria vía el reforzamiento de la perspectiva de la seguridad nacional versus la seguridad ciudadana. El perfil de la mayoría de quienes conformarán su gabinete, así lo confirma (Velásquez, 2019). Esto, en medio de los resultados mediocres de un gobierno que no resolvió los problemas estructurales que aquejan al país, donde la pobreza y la violencia social siguen siendo las razones para que miles de guatemaltecos decidan migrar, incluso arriesgando sus vidas, hacia Estados Unidos. Donde la violencia contra niñas, niños y mujeres es uno de los delitos más denunciados, pero no hay una respuesta institucional contundente, más bien la pretensión del Congreso, dominado por diputados oficialistas, es de realizar recortes sustanciales a los escasos programas sociales en el presupuesto que se aprobará en breve.

Los desafíos son diversos, y de naturaleza distinta. Unos están relacionados con las capacidades analíticas y el posicionamiento político, más retóricos o más radicales desde los movimientos sociales; con las propuestas que impliquen sólo cambios formales, o que estos sean de fondo para sacudir la inercia actual. En el caso de Guatemala, es evidente que el discurso de la corrupción por sí solo es insuficiente para atacar la raíz de los problemas sociales.

¿Se mantendrá la frágil -y formal- democracia, o habrá estallidos ante la presión del acumulado de tensiones, deudas históricas, conflictos de diversa índole, exclusiones y violencia? El despertar del Sur es nuestro espejo.

Bibliografía

- Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-CICIG (2015) Financiamiento de la política en Guatemala. Guatemala.
- García, Jody (2019) Historia desde el Estado de Sitio: la excusa para neutralizar a El Estor. En: Nómada (consultado en línea)
- Rodas Nuñez, Isabel. (2016) Las transformaciones en la cultura política de Guatemala: Una perspectiva después de la crisis política del 2015. En: NDI 2016. Transformaciones de la cultura política en Guatemala. Lecturas sobre la Crisis de 2015. Servi Prensa, Guatemala.
- Velásquez, Evelyn (2019) Militares integran Gabinete de Seguridad de Alejandro Giammattei. En: El Periódico, 25 de octubre 2019.

Nota

1. Ana Silvia Monón es Socióloga, investigadora y comunicadora social feminista guatemalteca. En 1993 fue cofundadora del programa radiofónico Voces de Mujeres. Actualmente es coordinadora y profesora-investigadora del Programa académico género y feminismos en FLACSO-Guatemala. Ha realizado investigaciones en temas como: situación de la niñez, participación política e historia de las mujeres, comunicación y género, mujeres y maquila, movimiento de mujeres, etnia y género, género y migración, educación integral en sexualidad

Crédito de la foto: Reuters/Josue Decavele

